

PRÓLOGO

En 1989, Max Turull Rubinat defendía en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona su tesis doctoral sobre *Oligarquía, fiscalitat i règim municipal al món urbà de la Catalunya medieval (Cervera, entre 1026 i 1430)*, publicada, de forma abreviada, en 1990 con el título *La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430*. Se daba la circunstancia de que el flamante doctor unía su condición de historiador a su formación en Historia del Derecho, cosa harto corriente en tiempos pasados y lamentablemente cada vez menos frecuente en los días que corren.

Pero en la tesis de Max Turull concurría otro mérito, aún menos frecuente: no sólo estudiaba a lo largo de un millar y medio de páginas la formación y consolidación del régimen municipal en Cataluña, siguiendo los pasos de sus maestros José María Font Rius y Aquilino Iglesia Ferreirós y utilizando como laboratorio el caso de Cervera (ciudad que, dicho sea de paso, conserva uno de los fondos archivísticos medievales más ricos de Cataluña) sino que integraba en su texto importantes y significativos datos relativos a la fiscalidad y a las finanzas de aquella villa. No creo equivocarme si digo que, por vez primera en la historiografía de Cataluña, los temas referidos a la hacienda municipal tomaban carta de naturaleza en una monografía de historia urbana y lo hacían, además, con la relevancia que se merecen y no como simple apéndice complementario. Así, por primera vez, veíamos bien descritos y perfectamente integrados en la historia del municipio aquellos tres pilares — por utilizar la expresión de Font Rius — que alimentaban los ingresos de la villa, a saber, por orden de aparición en escena, la *talla*, las *imposicions* y la deuda a largo plazo (*censales* y *violarios*).

A finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, las investigaciones sobre la fiscalidad y las finanzas públicas en Cataluña todavía estaban en mantillas. Precisamente por aquellos años empezó a formarse en la Institución Milá y Fontanals (CSIC) de Barcelona un grupo de investigadores que pretendíamos aproximarnos a esas cuestiones a través de la extraordinaria masa documental conservada en el Archivo de la Corona de Aragón.

Como parecía lógico, nuestras investigaciones comenzaron por estudiar los componentes y la evolución del patrimonio real en Cataluña, sin sospechar todavía la importancia que tendrían las ciudades y las villas del Principado en la gestión de la fiscalidad regia. Desde este punto de vista, la tesis de Max Turull fue absolutamente pionera, no sólo porque mostró por primera vez la extraordinaria complejidad del sistema fiscal municipal y sus relaciones con la fiscalidad de la Corona sino porque sirvió de modelo a las tesis que vinieron después: la de Pere Verdés otra vez sobre Cervera, desde finales del siglo XIV a los albores del XVI (la documentación conservada permitía insistir de nuevo sobre esta villa), y la de Jordi Morelló sobre Valls y Reus. Durante el mismo período, Max Turull aprovechó una larga estancia en París para ampliar la perspectiva de sus trabajos en contacto con juristas dedicados a la Edad Media como André Gouron, Albert Rigaudière y, más tarde, Florent Garnier.

Como puede fácilmente suponerse, el grupo de la Milá y Fontanals dedicado a la fiscalidad no podíamos dejar escapar a un investigador como Max Turull, que podía aportar al equipo todos sus saberes en materia de derecho tributario medieval y su experiencia en el manejo de la rica literatura jurídica catalana. Fue así como, desde 1999, Turull ha formado parte de todos y cada uno de los proyectos de investigación que se han ejecutado en aquella institución bajo mi dirección. Al mismo tiempo, fue uno de los protagonistas del *boom* de los estudios sobre fiscalidad que tuvo lugar a partir de la segunda mitad de la década de 1990: Congreso de León (1995), Coloquio de Lleida (1997), número monográfico de la *Revista d'Història Medieval* (Universidad de Valencia, 1996), participación en el proyecto hispano-francés sobre *La fiscalité des villes au Moyen Âge*, que dio lugar a la celebración de numerosas mesas redondas, a la publicación de cuatro volúmenes entre 1996 y 2004) y a la organización de un coloquio en París sobre *L'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle* (2001).

A través de la colección de trabajos que presenta Turull en este volumen misceláneo es posible observar cuáles han sido las *lignes de faîte* de su trayectoria investigadora y sus principales aportaciones en el ámbito de la fiscalidad y finanzas municipales en Cataluña.

Un conjunto de trabajos (los capítulos 6, 7, 8 y 13) abordan, a partir de los ejemplos de Tàrraga, Balaguer, Cervera y Banyoles, una serie de cuestiones básicas para explicar la configuración del gobierno de la ciudad medieval tales como el concepto de personalidad jurídica (*universitas*) o la capacidad de expresar la voluntad común del municipio por encima de la de cada uno de sus miembros, lo que dio lugar a la formación de los *Consejos*. En el caso concreto de la villa de Tàrraga (capítulo 6), y en colaboración con Jaume Ribalta, se muestra con todo lujo de detalles y a través de un nutrido aparato

crítico, el proceso que conduce desde el oscuro nacimiento de la *universitas* en la primera mitad del siglo XIII a la aparición del *consejo general* a principios de la siguiente centuria y, más tarde, a la formación de un *consejo* restringido en 1369.

Puesto que en todos los casos estudiados la existencia de una *universitas* y de un *consejo* que expresa su voluntad se documentan en el siglo XIII, es imposible desconectar ambos fenómenos de la recepción del *ius comune* que tuvo lugar en Cataluña por la misma época. En este sentido, me parece de un subido interés el capítulo 13: a través de un sólido estudio histórico-jurídico sobre el nacimiento de las haciendas municipales, se pone claramente de manifiesto hasta qué punto el derecho romano-justiniano y canónico (más los comentarios de los glosadores y post-glosadores) influyeron, desde principios del siglo XIII, en la transformación de las ciudades y villas en *universidades*. En efecto, tras Ramon de Penyafort, Sinibaldo Fieschi (papa Inocencio IV) elaboró la teoría de la personalidad moral aplicada a corporaciones y colegios. Un poco después, ya a mediados del Doscientos, se admitió que esos entes dotados de personalidad jurídica (las *universidades*) podían disponer de un *arca comunis* para satisfacer las necesidades de la comunidad de habitantes. Y aunque, en principio, ello no implicaba que las *universidades* gozasen de potestad tributaria, una cuidadosa lectura de destacados juristas catalanes (Callís, Mieres, Càncer, Xammar, Bosch) permite concluir que, si la ciudad tenía el permiso del soberano para congregarse y constituir un municipio, también podría imponer *tallas* o *colectas* para atender a las necesidades de sus moradores. La práctica observada en Cataluña lo muestra con toda claridad: ya desde los umbrales del siglo XIII, las *universidades* disponían de un *arca común* y podían organizar derramas sin tener que solicitar la autorización regia en cada ocasión.

Pero lo verdaderamente importante —y aquí abordamos otra de las aportaciones más relevantes de Turull— es comprobar que la existencia de un *arca común* y la práctica de repartir *tallas* precedieron en muchas ocasiones a la propia existencia del régimen municipal (capítulos 1, 2, 3 y 12). Uno de los casos que mejor lo ilustra es el de Lleida: esta ciudad recibió en 1196 de Pedro el Católico la autorización para tener *arca común*, alimentada con las aportaciones de los vecinos, y al año siguiente el mismo monarca le concedió el privilegio del *consulado*, el primero documentado en Cataluña. Por tanto, se observa con nitidez en este caso que la organización de la hacienda, por rudimentaria que fuese en aquella época, fue anterior o prácticamente simultánea a la institucionalización político-jurídica de la ciudad. Además, como el autor muestra con detalle en el caso de Cervera, la etapas de configuración del régimen municipal estuvieron comandadas

siempre por problemas derivados de la gestión fiscal y financiera: así, tanto el propio nacimiento del *consejo* en 1311 como su consolidación en 1329-1334 lo fueron a consecuencia de las denuncias por la corrupción de los regidores y la mala administración de la hacienda. Incluso un siglo después, las reformas del gobierno en 1421 se hicieron otra vez para poner coto a las malversaciones de que fueron acusados los dirigentes municipales, en un contexto de profundas dificultades financieras ocasionadas por el insoportable nivel del endeudamiento censal. Todo ello permite concluir, en palabras del propio autor, que «no debemos considerar la hacienda y la fiscalidad de un municipio como una más de las funciones sobrevenidas a un *consejo* preexistente; por el contrario, este *consejo* nacería y obtendría su apariencia casi definitiva con la finalidad de organizar con más eficacia la recaudación de tributos entre los miembros de la *universitas*».

Si, como afirma Turull, no se puede hablar en términos generales de un verdadero sistema fiscal y financiero municipal con anterioridad al primer tercio del siglo XIV, ¿cuál fue el motor que impulsó la organización de las haciendas locales y, por ende, la creación y consolidación del régimen municipal? Las investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace tiempo, combinando de manera ejemplar la documentación del Archivo Real (en el Archivo de la Corona de Aragón) con la custodiada en los archivos municipales, muestran hasta qué punto fueron las crecientes exigencias de la monarquía (sobre todo, a partir del acceso al trono de Pedro el Ceremonioso en 1336) las que contribuyeron de forma decisiva al nacimiento de la fiscalidad municipal (capítulo 11). Dice con razón Bernard Chevalier para el caso de Francia: *c'est la pression de l'État naissant qui, tout en ruinant les finances débiles des communes, a poussé par ses exigences et son exemple les bonnes villes sur la voie de l'impôt*. Pues bien, lo mismo puede predicarse *mutatis mutandis* de las ciudades catalanas. Así, las *tallas*, documentadas ya a finales del siglo XII y de forma general a lo largo del Doscientos, podían servir para atender a determinadas necesidades locales (sin duda, muy modestas en aquella época) pero, por encima de todo, se establecieron para pagar la *questia*, el tributo regio por antonomasia. Más tarde, la expansión mediterránea de la Corona y los conflictos bélicos de ella derivados se tradujeron en continuas peticiones de subsidios a las ciudades, para cuya satisfacción los monarcas otorgaron a los municipios un nuevo recurso fiscal: las *imposicions* o impuestos indirectos sobre el consumo y las transacciones. Por fin, mediado el siglo XIV, las urgencias de la Corona para recibir inmediatamente los donativos que obtenía fueron la causa de la adopción por los municipios de una nueva modalidad crediticia: la deuda a largo plazo. Así pues, podemos observar con claridad que el ritmo de adquisición de los tres pilares que alimentaban las haciendas locales —*talla*,

imposicions y endeudamiento censal — vino marcado por la voracidad fiscal de la monarquía.

Ahora bien, esta imbricación entre la fiscalidad real y la municipal obliga al planteamiento de algunas cuestiones sobre la potestad tributaria de los monarcas en Cataluña, que aborda Turull en los capítulos 16, 17 y 18. Naturalmente, debemos partir de la especial naturaleza del poder político en los países de la Corona de Aragón. Es de sobra sabido que, desde finales del siglo XII, los grupos privilegiados empezaron a poner límites a las capacidades de los soberanos en materia fiscal. A partir de las Cortes de Barcelona de 1283, los monarcas no podían promulgar constituciones de carácter general sin el consenso de los tres brazos presentes en las asambleas ni, como corolario, establecer ningún impuesto general sin su autorización. Por eso, la nueva fiscalidad catalanoaragonesa, desde mediados del siglo XIV, escaparía al control del monarca para ser gestionada por las Cortes y su emanación, las respectivas Diputaciones Generales de Cataluña, Aragón y Valencia. Pero, junto a ello, tampoco debemos olvidar que los soberanos disponían de todo el instrumental jurídico necesario —el *Liber Iudiciorum*, los *Usatges* y todo el arsenal del derecho común— para afirmar con rotundidad su derecho a imponer. Así, a pesar de las limitaciones apuntadas, Turull muestra (capítulo 17) cómo a lo largo del siglo XV, el monarca vio reconocida su potestad tributaria sobre los nobles y los vasallos de la Iglesia. De esta forma se llegó a una situación de inestable equilibrio y un tanto paradójica: el rey no podía establecer impuestos por su autoridad y sin el consentimiento de las Cortes pero, al mismo tiempo, tampoco nobles y eclesiásticos podían hacerlo en sus respectivas jurisdicciones sin contar con la autorización regia. En estos parámetros se mueven las formulaciones de Andreu Bosch, jurista del siglo XVII, interesantes sobre todo por sus reflexiones en torno al control municipal sobre las *imposicions*, en tanto que columna vertebral de la fiscalidad local (capítulo 18).

Con todo, aun admitiendo el principio de que el rey debía autorizar la percepción de *imposicions* así como mantener un cierto control sobre la emisión de *censales* y *violarios* por parte de las ciudades de realengo, debemos reconocer las amplias cotas de autonomía fiscal de que gozaron los municipios catalanes. Desde el momento en que el monarca permitía que los regidores modificasen a su antojo las tarifas de las *imposicions* y prolongasen su período de vigencia, pero sobre todo a partir de cuando estos impuestos fueron colocados al servicio de una deuda pública que crecía como una descomunal bola de nieve, los municipios defendieron con tesón su control sobre este importante recurso fiscal. Me parece relevante poner énfasis en este elevado nivel de autonomía fiscal y financiera, frente a lo que sucede en otras

monarquías occidentales por la misma época, en tanto que uno de los rasgos más característicos de los municipios de Cataluña.

Prueba indirecta de esta autonomía es la ausencia absoluta, en las *Constitucions i altres drets* de Cataluña, de disposiciones generales que regulen los aspectos esenciales de la fiscalidad municipal y sus relaciones con la fiscalidad regia, como se muestra en el capítulo 16. Aquí Turull y Pere Verdés proporcionan una muy útil selección de las noticias contenidas en aquellas *Constitucions* referentes a los dos componentes básicos de las haciendas locales: las *imposicions* y el endeudamiento a largo plazo. El hecho de que la inmensa mayoría de las disposiciones sobre fiscalidad municipal contenidas en esta compilación sean capítulos de Cortes dice mucho sobre la importancia de esta institución en el ordenamiento jurídico-político del Principado. Así, es fácil adivinar, tras muchos de estos capítulos aprobados en las asambleas, las peticiones dirigidas por el brazo real al monarca de cara a preservar y fortalecer su autonomía fiscal; pueden servir de ejemplo las reiteradas solicitudes para que las causas derivadas de las *imposicions* fuesen sustanciadas en las mismas *universidades* y no en la Real Audiencia.

De aquí deriva el interés que tendría conocer quiénes eran los síndicos que representaban al brazo real en las Cortes, saber de qué poderes eran portadores y averiguar los intereses que defendían en las asambleas. Es bien notorio que el material fundamental para conocer el desarrollo de las Cortes lo forma la rica documentación de carácter parlamentario que se conserva para Cataluña: procesos de Cortes, capítulos del donativo, *greuges*, constituciones, etc. Sin embargo, a pesar de su elevado interés, esa documentación rara vez nos permite penetrar en la naturaleza de las negociaciones —algunas muy duras, sin duda— que tenían lugar a lo largo de las sesiones. Sólo desde hace poco tiempo se está empezando a aprovechar la documentación conservada en los archivos municipales con el fin de contribuir al mejor conocimiento del desarrollo de las asambleas. Así, a través de las instrucciones enviadas por los regidores a los síndicos y las respuestas de éstos, con informaciones preciosas sobre lo discutido en las reuniones, sería posible levantar un poco el velo que oculta las negociaciones entre el rey y los brazos o las deliberaciones entre los propios brazos, más allá de la fría prosa notarial del proceso de Cortes. Max Turull abre un camino en esta dirección estudiando el perfil social, político e institucional de los síndicos urbanos en las Cortes y Parlamentos de Cataluña durante gran parte del siglo xiv (capítulo 10). Utilizando de nuevo el inagotable depósito documental de Cervera y completándolo con material de otras procedencias, nuestro autor analiza, entre otras cuestiones, el proceso de elección de los síndicos, los poderes otorgados por el municipio y los costes económicos de sus misiones. Desde el punto de vista profesional, mercaderes,

notarios y juristas nutrieron, con pocas excepciones, las listas de síndicos; y si entre ellos predominaban los poseedores de una fortuna media (sin alcanzar la cima de los grandes contribuyentes), todos tenían, en cambio, una amplia experiencia en la vida municipal ya que habían ocupado cargos relevantes (*paers* o *consellers*) antes de ser enviados como representantes de Cervera a las Cortes. Ojalá se multipliquen trabajos de la misma o parecida índole, pues ello nos permitirá, entre otras cosas, conocer el *background* de muchas asambleas y entender el carácter y el contenido de las constituciones aprobadas y de los privilegios obtenidos en aquéllas por el brazo real.

He dejado para el final dos trabajos (los capítulos 14 y 15) que muestran otro de los campos donde Max Turull ha sido verdadero pionero: el estudio del impuesto directo en los municipios de Cataluña. En el capítulo 14 se reproduce un trabajo publicado en 1997 donde el autor desentraña, un poco a la luz del derecho tributario contemporáneo, todo el proceso inherente a la ordenación y percepción de las *tallas*: autorización regia, hecho imponible, criterios de exención, sujetos pasivos, manifestación de bienes, determinación de la deuda tributaria, etc. Respecto a la manifestación de los bienes de los contribuyentes, hemos de decir que Cataluña no le va demasiado a la zaga a la Francia meridional o a la Italia centro-septentrional, donde tanto abundan las *estimas*, los catastros y los *compoix* medievales. Como se muestra al final del capítulo 15, son numerosas las ciudades y villas del Principado en cuyos archivos se custodian también libros de *estimes*, de *valies* o *manifests*, de tanto valor no sólo para la fiscalidad sino también para la demografía y la historia socio-económica de una comunidad. Gracias a este espléndido trabajo, escrito en colaboración con Jordi Morelló, otro experto en el tema, disponemos de un valioso estado de la cuestión acerca de lo que aportan (y lo que silencian) estas fuentes. Es sabido que, desde que se puede documentar el reparto de *tallas* entre la población, éstas debían hacerse *per solidum atque libram*, es decir, de manera proporcional a los bienes de cada contribuyente. Ningún libro de *estimes* se ha conservado para esta remota época y hemos de esperar hasta la segunda mitad del siglo XIV, al compás de la definitiva consolidación del sistema fiscal municipal, para encontrar los primeros ejemplares de este tipo de fuentes. En el trabajo de referencia, Turull y Morelló pasan revista, con meticulosidad y rigor admirables, a las cuatro principales cuestiones que plantean los libros de *estimes*: cómo se confeccionaban, quiénes declaraban en ellos, qué tipos de bienes se anotaban y cómo se evaluaba la riqueza. Desearíamos que este estado de la cuestión, fechado en 2005, quedase pronto anticuado, señal de que han aparecido nuevos *manifests* o se han realizado nuevos estudios sobre los existentes.

En suma, en esta selección de trabajos de Max Turull (algunos de ellos escritos en colaboración con otros autores), el lector encontrará una renovada visión de los orígenes del régimen municipal en Cataluña y del papel que cupo a la fiscalidad y a la hacienda en este complejo proceso. Y lo hará en la compañía y de la mano de un historiador del mundo urbano en la Cataluña medieval que, además, es historiador del Derecho. Esta doble cualidad creo que contribuye a romper barreras entre disciplinas, cuyos cultivadores deberíamos trabajar más codo a codo. Creo que la mejor enseñanza que se puede sacar de este libro es observar la pertinencia con que su autor combina los textos de naturaleza jurídica con los datos documentales emanados de la práctica. Es evidente que cualquier investigación que privilegie uno de los dos extremos en detrimento del otro será incompleta y dificultará el acceso a esa ideal reconstrucción global del pasado histórico. Por tanto, sólo me resta expresar la esperanza de que los trabajos incluidos en este volumen sean útiles no sólo por los datos, las noticias e interpretaciones que aportan sobre el régimen y la fiscalidad municipales en la época medieval sino, muy especialmente, por el empleo de un método de análisis que puede resultar sugestivo tanto a los historiadores del Derecho como a los que somos llamados, en expresión tomada de la práctica médica, historiadores «generalistas».

Manuel Sánchez Martínez
Institución Milá y Fontanals (CSIC)